



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XI LEGISLATURA

Serie D:
GENERAL

25 de abril de 2016

Núm. 60

Pág. 1

ÍNDICE

Página

Composición y organización de la Cámara

DIPUTADOS

Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados	4
---	---

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000147	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre criterios para la reforma del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto.	
	<i>Enmiendas</i>	20
	<i>Aprobación con modificaciones</i>	22
162/000173	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la adopción urgente de medidas para evitar la quiebra y desaparición del sector siderúrgico.	
	<i>Enmiendas</i>	23
	<i>Aprobación</i>	27

Comisión de Justicia

161/000152	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para solucionar los problemas que está generando la aplicación LEXNET. <i>Desestimación así como enmiendas formuladas</i>	28
161/000171	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la derogación de la pena de prisión permanente revisable. <i>Aprobación</i>	32
161/000250	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el estudio de una posible reforma normativa encaminada a la instrucción y enjuiciamiento conjunto de mayores y menores de edad, en determinadas circunstancias. <i>Desestimación</i>	32
161/000265	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación del artículo 22.1 del Código Civil. <i>Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas</i>	32

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 60

25 de abril de 2016

Pág. 28

Comisión de Justicia

161/000152

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 5 de abril de 2016, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre medidas para solucionar los problemas que está generando la aplicación LEXNET, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 34, de 15 de marzo de 2016.

A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para aplicar medidas que permitan solucionar los problemas que la aplicación LEXNET está generando, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Enmienda

De modificación.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Convocar con carácter urgente al Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTAJE) para que:

a. Dé respuesta eficaz e inmediata a los problemas que están surgiendo en la aplicabilidad de LEXNET, mediante la puesta en común de las incidencias técnicas con los operadores jurídicos, así como, establezca mecanismos para que no se vean mermadas las garantías procesales de las partes durante este tiempo en el que no se ha podido llevar a cabo la total ejecución, por falta de eficacia y homogeneidad de los medios telemáticos en la Administración de Justicia.

b. Revalúe la viabilidad temporal, económica y técnica de los hitos que estableció el Ministerio de Justicia para la consecución del Expediente Judicial Electrónico en la Administración de Justicia.

2. Remitir los nuevos acuerdos que, en su caso, se adopten por el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTAJE) y comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para dar cuenta de los resultados de la evaluación realizada por él mismo sobre las cuestiones referidas en el apartado anterior.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.—**Miguel Ángel Heredia Díaz**, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley sobre medidas para solucionar los problemas que está generando la aplicación LEXNET, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 60

25 de abril de 2016

Pág. 29

Enmienda

A la exposición de motivos.

De adición.

Se propone añadir a la exposición de motivos entre los actuales párrafos sexto y séptimo el siguiente nuevo párrafo:

[...] y el Juez Decano de Granada (párrafo actual sexto).

«El Consejo Fiscal trató en su reunión del día 16 de marzo de 2016¹ la Dación de cuentas de los problemas de implementación del sistema LEXNET en las Fiscalías, señalando literalmente que “Analizado y debatido el informe de la Fiscalía General del Estado sobre la situación actual de la aplicación del sistema LEXNET en aquellos territorios en que se está implementando, el Consejo Fiscal muestra su profunda preocupación por las importantes disfunciones que su implantación está suponiendo. El Ministerio Fiscal está plenamente comprometido con la modernización de la Administración de Justicia y el uso de las herramientas tecnológicas”, advirtiéndole que “Las dificultades de una actuación eficaz del Ministerio Fiscal en los expedientes digitales pueden generar responsabilidad patrimonial para la Administración.”»

Así mismo, las numerosas caídas o colapsos [...] (párrafo actual séptimo).

Motivación.

El Consejo Fiscal es un órgano del Ministerio Fiscal que asiste en sus funciones al Fiscal General del Estado y está presidido por el Fiscal General del Estado e integrado por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Inspector Jefe y nueve Fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías. Son miembros natos del Consejo Fiscal el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal Inspector. Nos hallamos, por tanto, ante un órgano de máxima importancia cuyas opiniones deben ser tenidas en cuenta.

La sesión que este órgano mantuvo el 16 de marzo de 2016 esto es, dos meses y medio después de la implantación del sistema LEXNET, refleja la preocupación de la Fiscalía General del Estado por un sistema cuyo funcionamiento es deficiente.

Entiende este Grupo Parlamentario que la adición de este párrafo a la Exposición de Motivos de la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos complementa de una forma relevante el listado de órganos relacionados con la Administración de Justicia que tienen honda preocupación por la implantación de un mal sistema tecnológico.

Enmienda

A la exposición de motivos.

De adición.

Se propone añadir los siguientes nuevos párrafos al final de la exposición de motivos:

«Además de los problemas derivados del mal funcionamiento del sistema LEXNET señalados en los párrafos anteriores, existe un problema mayor y es que el diseño de la arquitectura del sistema vulnera gravemente la separación de poderes que debe regir un Estado democrático, así como los derechos fundamentales de los intervinientes en los procesos judiciales.

Mediante la implantación del sistema LEXNET es ahora el Poder Ejecutivo, ya sea el Ministerio de Justicia o las Consejerías de las Comunidades autónomas con competencias en esta materia, quien aloja la información que entra y sale del Poder Judicial. Mientras se utilizaba el formato papel, el Poder Ejecutivo desconocía qué procedimientos concretos se tramitaban en cada órgano del poder judicial. Mediante la implantación del Sistema LEXNET, el Poder Ejecutivo dispone ahora de una relación pormenorizada de qué procedimientos se tramitan ante cada órgano judicial y, además, de los datos personales tanto de los profesionales como de las partes procesales y de los intervinientes en cada uno de los litigios.

Este carácter indiscriminado de alojamiento y acceso por el Ejecutivo a absolutamente toda la información de todos los litigios que se celebran en todas las jurisdicciones ha de tener unos límites, que son los que ya están reconocidos en las actuales leyes.

¹ Puede consultarse la sesión de fecha 16 de marzo en la URL de la web de la Fiscalía: <https://tinyurl.com/2016-03-16-consejo-fiscal>

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 60

25 de abril de 2016

Pág. 30

Por una parte, el alojamiento y acceso indiscriminado del Ejecutivo a la información procesada por el Poder Judicial ha de tener los límites señalados en las normas vertebrales del Estado, diseñadas en la parte orgánica de la Constitución, con especial atención a la independencia de los órganos judiciales, sin que quepa a través de un sistema tecnológico imponer una nueva posibilidad fiscalizadora no reconocida ni constitucionalmente ni en las normas orgánicas.

Por otra parte, el alojamiento y acceso indiscriminado del Ejecutivo a la información ha de tener los límites de los derechos fundamentales de las personas y deberá prestarse especial cuidado al tratamiento de los datos relativos a la intimidad personal de las partes procesales, a la tutela judicial efectiva garantizando la independencia de la Abogacía y el sagrado derecho de defensa, así como al tratamiento de los datos de cualesquiera otros intervinientes en los procedimientos en su condición de peritos o testigos.»

Motivación.

En 1978 el filósofo norteamericano Langdon Winner acuñó el concepto de sonambulismo tecnológico para definir una realidad. Señalaba que el sonambulismo, más que el determinismo, caracteriza la política tecnológica de la izquierda, derecha y centro, siendo el silencio su modo distintivo de hablar. En definitiva, lo que Winner nos recordó entonces es la ausencia de conocimiento de los temas tecnológicos por parte de quienes tienen las responsabilidades de gobierno y de administración.

El Sistema LEXNET es un ejemplo perfecto del concepto de Winner sobre sonambulismo tecnológico. Si hasta ahora todas las voces que han criticado LEXNET se han fundamentado en el mal funcionamiento del sistema, sin embargo el problema que se produce con la implantación de esta tecnología con su actual arquitectura es mucho más grave. Hemos de recordar que los servidores del Sistema LEXNET son gestionados no por el Poder Judicial, sino por el Ministerio de Justicia y por las diferentes Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas que tengan competencias en esta materia, por lo que en palabras del abogado y doctor en filosofía de la tecnología don Javier de la Cueva:^{2 y 3}

[...] De esta manera, mediante la ejecución de una tecnología hemos inoculado en el sistema político un permiso al poder ejecutivo para acceder a unos datos, permiso que sería impensable concedérselo mediante una ley.

Y en efecto: ¿podríamos concebir la promulgación de una norma jurídica en la que estableciésemos que el Poder Ejecutivo tuviese acceso a todos los datos de todos los procedimientos de todas las jurisdicciones? Evidentemente no. La pregunta que permanece pendiente de respuesta entonces es, si la promulgación de tal ley no sería conforme al Ordenamiento Jurídico, ¿podemos entonces implantar una tecnología que precisamente produzca el efecto que no podemos lograr mediante la promulgación de una ley? La respuesta no puede ser más que negativa.

La implantación del Sistema LEXNET con su actual arquitectura, donde toda la información se aloja por el Poder Ejecutivo impone que éste disponga de una información que antes no tenía y sin que exista habilitación legal suficiente al efecto. Por vía de la mera actuación tecnológica no cabe dotar al Ejecutivo de una información nuclear sobre otro poder del Estado. Mediante LEXNET, el Ejecutivo dispone de absolutamente todos los datos que un Juez maneja en el trabajo de su juzgado lo que supone un atentado contra la independencia judicial consagrada en el artículo 117 de la Constitución. El Ejecutivo conoce mediante LEXNET cuántos casos y de quién se tramitan en cada uno de los diferentes órganos judiciales y este conocimiento se produce desde el mismo inicio de cada uno de los procedimientos.

² Este abogado viene denunciando los problemas de separación de poderes y de vulneración de derechos fundamentales del sistema LEXNET públicamente desde 2007. Vid. DE LA CUEVA GONZÁLEZ-COTERA, Javier. (2008). «Derecho y Tecnología: la apertura de las APIs», en Propiedad Intelectual. Nuevas tecnologías y libre acceso a la cultura. Puebla, México, Universidad de las Américas, pp. 173-185. Documento accesible en línea: <http://radio-ccemx.org/descargas/propiedadint.pdf>. ISBN: 978 607 7690.

³ DE LA CUEVA GONZÁLEZ-COTERA, Javier. (2014). Pragmáticas tecnológicas ciudadanas y regeneración democrática. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía. Madrid, pág. 97. Documento accesible en línea: <http://eprints.ucm.es/28898/1/T35803.pdf>

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 60

25 de abril de 2016

Pág. 31

Pero no solo se atenta contra la independencia judicial, sino que con LEXNET el Ejecutivo dispone de la información de las partes procesales intervinientes, sus letrados y demás personas llamadas al proceso. Que sea el Poder Ejecutivo quien aloje y gestione esta información supone entregarle unos datos a los que no tiene derecho de ninguna de las maneras. Tal entrega vulnera lo dispuesto en el artículo 8, apartados 1 y 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre privacidad de las partes, pero también roza la legalidad del artículo 6, apartado 1, de dicho Convenio, que marca los límites de acceso a la publicidad de la información de un procedimiento al regular los derechos a un proceso equitativo, sin que en ningún caso se permita el acceso indiscriminado de tales datos al Poder Ejecutivo. En el mismo sentido, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea regula en su artículo 8 los datos personales y en especial se estaría vulnerando el apartado 2 en el que se exige que los datos se tratarán para fines concretos, por lo que se excluye la gestión indiscriminada y global de los mismos.

También serían aplicables a LEXNET las resoluciones judiciales de los Tribunales internacionales que han analizado los casos en los que se ha producido un alojamiento de los datos personales sin respetar los debidos límites del artículo 8.2 de la Carta. Así, las sentencias del TJUE de fecha 8 de abril de 2014, en el caso Digital Rights Ireland, donde se declaró nula la Directiva 2006/24/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones, y la más reciente de fecha 6 de octubre de 2015, en el caso Maximillian Schrems contra Facebook, donde el TJUE declaró nula la decisión 2000/520 de la Comisión sobre puerto seguro en la transmisión de datos.

Si el TJUE declaró nula en su sentencia de 8 de abril de 2014, la Directiva que regulaba el almacenamiento de los datos de las comunicaciones realizado por las operadoras, con mayor razón podemos presumir que declarará nulo el almacenamiento por parte del Poder Ejecutivo de los datos de los procedimientos judiciales. Asimismo, si el TJUE declaró nula, en su sentencia de 6 de octubre de 2015, la Decisión de la Comisión Europea que permitía la transmisión de los datos privados entre Europa y los EE.UU. cuando no se garantizaban en el caso Facebook la ausencia de la intromisión de la NSA norteamericana (la Agencia de Seguridad norteamericana, órgano dependiente del Poder Ejecutivo), podemos presumir que declarará nula cualquier autorización homóloga al efecto en nuestro país.

En resumen, el alojamiento indiscriminado de los datos privados de todos los justiciables, partes profesionales y demás intervinientes en los procedimientos judiciales no sería conforme con la legislación fundamental aplicable. No debe permitirse la implantación de una tecnología cuya arquitectura permita tal intromisión del Poder Ejecutivo en los datos privados de las personas cuyos datos no deben salir del ámbito del órgano judicial donde se hace justicia sobre su asunto.

Enmienda

Al artículo 1.

De adición.

Se propone añadir al final del artículo el siguiente texto:

«[...] permitiéndose la doble vía de presentación de escritos (tanto iniciadores como de trámite), a elección del operador, hasta la correcta implementación del sistema en su funcionamiento técnico, así como hasta que el alojamiento de la información y la gestión de la plataforma se realice en servidores exclusivamente dependientes del poder judicial.»

Motivación.

Idéntica justificación que la señalada en la enmienda anterior.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.—**David Bravo Bueno**, Diputado.—**Íñigo Errejón Galván**, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.